

Arica, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO:

Don **ANDRÉS PALMA TAPIA**, abogado, en representación de la parte demandada, Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en autos laborales caratulados “**JIMÉNEZ** con **GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**”, **RIT O-228-202121**, **RUC 21-4-0371784-0** y **Rol Corte Laboral 84-2022**, interpone recurso de nulidad, en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Letras del Trabajo, con fecha 5 de julio del presente año, sólo en aquella parte que determinó acoger parcialmente la demanda y declaró la existencia de una relación laboral entre su representada y la demandante, condenando al pago de las prestaciones indicadas en la sentencia, para que conociendo del presente recurso, se proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, con arreglo a la ley, declarando en definitiva que se rechazan en todas sus partes las acciones deducidas, manifestando que en el caso de autos, no ha existido relación laboral y que su representada no adeuda ninguna de las prestaciones pretendidas, con costas.

La recurrente funda el presente recurso de nulidad, en virtud de la causal contenida en el artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, “*Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica*”, específicamente los principios de la lógica.

En forma subsidiaria, funda el presente recurso, en la causal genérica contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, en cuanto expresa que será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva “[...] *se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo*”.

Se procedió a llevar a cabo la audiencia para conocer del referido recurso de nulidad, con fecha ocho de septiembre del año en curso, quedando la causa en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en cuanto a la primera causal, denuncia la recurrente la infracción evidente que resulta del fallo, en relación con el principio de la lógica y precisamente infracción al principio de “la razón suficiente” y el “de la identidad”.

Indica que el juez tuvo en especial consideración para concluir que había relación laboral entre las partes, los referidos certificados creados al efecto para ser presentados en juicio, señalando las otorgantes de aquellos certificados, que la desvinculación sería injusta y que se emitieron para aportar mayores antecedentes, sumado a que doña Arline Piñones Cerda, quien elaboró uno de los



certificados, declaró en el mismo sentido, apreciación que obviamente le resta imparcialidad a su testimonio, pero que igual sirvió para que el juez de base le diera mérito suficiente, prefiriéndola respecto de la prueba de su parte.

Analiza que el principio de la razón suficiente, implica que todo juicio o proposición para ser verdadero, requiere de una causa o razón suficiente. Sin embargo, indica que, en el presente caso, el raciocinio del sentenciador para afirmar o concluir la existencia de una relación laboral, radica únicamente en dos deponentes que carecen de imparcialidad en su testimonio y en dos certificados.

Reitera que respecto de doña Arline Piñones Cerda, por las razones ya expuestas y respecto de doña Valerie Montecinos Valenzuela, quien al declarar, indicó que también fue desvinculada del Gobierno Regional el mismo año, plantean afirmaciones que les restan sin lugar a dudas credibilidad, lo que precisamente afecta el principio lógico en comento, dado que al no revestir esos antecedentes la fuerza probatoria que el juez le asignó en el fallo, el razonamiento judicial adolece de un notable y manifiesto defecto en su elaboración, pues la conclusión fáctica, se edificó sobre una premisa que no era válida.

Advierte la recurrente, que es errado sostener por parte del sentenciador, por un lado, tener por cierto como hechos acreditados los establecidos en los numerales 2, 4, 9 y 10 del considerando décimo, para luego, por otro lado, afirmar que la parte demandada no acreditó la calidad de experto de la actora, en el considerado décimo sexto, es decir, algo no puede ser y no ser a la vez, o también llamado principio de identidad, el que evidentemente se ha visto manifiestamente vulnerado.

Finalmente, y sumado a lo anterior, es el propio tribunal a quo, quien en su considerando décimo segundo resuelve que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, la obligación de acreditar que estamos en presencia de una relación laboral regulada por el Código del Trabajo, era carga probatoria de la demandante y no de su parte.

Indica que el vicio anterior, esto es, la falta de análisis coherente, razonado y lógico de las pruebas rendidas en el proceso, contra el tenor de la obligación contenida en el artículo 456 del Código del Trabajo, ha permitido al sentenciador vulnerar de manera manifiesta los principios de la lógica tantas veces enunciados y estimar que la demandante se encontraba prestando servicios bajo un contrato regido por dicho estatuto laboral, cuando los hechos probados dieron cuenta que se encontraba prestando servicios bajo un contrato de honorarios.

Lo anterior, trajo como consecuencia que el tribunal acogiera la demanda parcialmente, y que de lo contrario tendría que haber sido rechazada, en todas sus partes, por cuanto no podría haberse declarado la existencia de una relación



laboral, que era imprescindible para el éxito de las demás acciones.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la sentencia recurrida da por acreditada la existencia de una relación laboral entre la actora y su representada, conclusión que pugna con el principio de la razón suficiente y el de la identidad, no pudiendo con la prueba rendida en autos, llegar a aquella conclusión como se analizó, sino que todo lo contrario, que estamos en presencia de un contrato a honorarios, lo que ha sido suficientemente probado por su parte, por lo que solicita en relación a esta primera causal, al incurrir la sentencia en una infracción manifiesta a las normas sobre valoración de la prueba, trasgrediendo las reglas de la sana crítica, en particular el principio lógico de la razón suficiente y el de la identidad, su parte solicita se invalide la sentencia recurrida de fecha 5 de julio de 2021 y, en su lugar, se dicte sentencia de reemplazo en que se resuelva que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por cuanto nos encontramos ante un relación contractual de naturaleza civil- administrativa, consistente en un convenio de honorarios celebrado con los supuestos fácticos del artículo 11 del Estatuto Administrativo; con costas.

SEGUNDO: Que, como una segunda causal subsidiaria, plantea el de infracción de ley, toda vez que la sentencia recurrida, ha infringido sustancialmente las normas contenidas los artículos 11 de la Ley N° 18.834 y artículo 7 del Código del Trabajo.

En relación al artículo 7 del Código del Trabajo, el vicio particular que se denuncia, dice relación con una contravención formal de la ley, que en opinión del profesor Astudillo, tiene lugar cuando existe una abierta transgresión de la norma.

Comenta que, si revisa detenidamente el tenor literal del artículo 7 del Código del Trabajo, podrá advertirse que ninguno de los requisitos contemplados para el establecimiento de una relación laboral se configura en el caso de marras.

Esta transgresión que ha efectuado el sentenciador es incorrecta, fundamentalmente porque no analizó correctamente el contrato de prestación de servicios firmados por la actora con la declaración del testigo de esta parte y la documental acompañada.

El error de derecho denunciado, claramente tiene influencia sustancial en el resultado final del juicio, por cuanto es el fundamento dado por el sentenciador para señalar que sí existe una relación laboral, no expresando en ningún acápite del texto recurrido, por ejemplo, que existía algún tipo de vínculo de subordinación o dependencia, órdenes impartidas por alguna jefatura, o algún otro presupuesto del artículo 7 del Código del Trabajo, nada de eso existe en el fallo recurrido, sólo la afirmación de que las labores que desempeñó la actora no serían labores



accidentales, no habituales del Servicio o labores específicas, que utiliza el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Sobre esta última norma, vale decir, el artículo 11 de la Ley N° 18.834, estima que el juez del grado ha incurrido en a lo menos dos de las enunciadas infracciones, por cuanto efectúa una errónea interpretación de la norma, y en razón de ello, hace una falsa aplicación de la misma, lo que genera como consecuencia el silenciamiento de aquel inciso que era el efectivamente aplicable al caso sub lite.

Es por lo anteriormente dicho que, entre la demandante y la parte demandada, nunca existió un contrato de trabajo ni menos una relación de tipo laboral sujeta al artículo 7 del Código del Trabajo. La naturaleza jurídica de la relación entre las partes, no es otra que la de un contrato de honorarios, tal y como lo concibe el artículo 11 del Estatuto Administrativo, es decir, se trata de un contrato civil regido por sus estipulaciones y por la legislación común aplicable supletoriamente, porque las funciones encargadas a la demandante por esa repartición, en esos contratos a honorarios, constituyeron cometidos concretos y específicos, en una División nueva del Gobierno Regional creada al alero de la dictación de la Ley N° 21.074 de 2018.

Señala que los derechos que asisten a las personas que prestan sus servicios especializados en la modalidad de honorarios, no son sino los que establece el respectivo contrato y que consisten, básicamente, en el derecho a exigir el pago de sus honorarios, conforme lo ha señalado la Contraloría General de la República en sus dictámenes Nros. 11.862, de 1990, y 6.187 de 1996.

De tal manera, que es dable recordar que es improcedente efectuar descuentos por previsión y salud en los estipendios que se pagan por el período servido a honorarios, porque la aceptación de un criterio diverso, significaría un reconocimiento de una calidad jurídica que la ley no les otorgó, ello considerando, además, que las cotizaciones previsionales se calculan, en general, en relación con los sueldos asignados al respectivo empleo, no poseyendo los honorarios esta calidad de prestación, conforme a lo señalado por el Órgano Contralor mediante el Dictamen N.º 52.084, de 2007.

Destaca que es el propio tribunal a quo, quien tuvo además por acreditado en juicio, en su considerando décimo, numeral 26, que *“la actora durante todos los años que prestó servicios para la demandada recibió su respectiva devolución de impuestos.”*, y, luego, cuando se pronuncia sobre el cobro de cotizaciones de seguridad social reclamadas por la demandante, en su considerando vigésimo segundo fundamenta para su posterior rechazo que: *“Adicionalmente, cabe mencionar que en año 2008 se promulga la Ley 20.255 sobre reforma previsional.*



Esta ley dispone que “todos los trabajadores a honorarios estarán obligados a realizar el pago de cotizaciones para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y de salud”, postergándose su inicio para el mes de enero de 2018. Es decir, todos los trabajadores que perciban honorarios y emitan boletas a partir del mes de enero 2018 debían obligatoriamente cotizar de manera independiente el 20% imponible de sus ingresos, por concepto de cotizaciones de seguridad social. En síntesis, los prestadores de servicios bajo régimen de honorarios de las instituciones públicas debe pagar sus cotizaciones previsionales en forma independiente, las que corresponden al 20% de los ingresos que se perciban por concepto de boletas de honorarios. Para finalizar, la improcedencia de su cobro también se ve reflejada en el contrato a honorarios a suma alzada suscrito por las partes y aprobado por la Resolución RA N° 944/157/2021, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que al efecto dispuso en su cláusula segunda que “El Prestador de Servicios en su calidad de contratado a honorarios y de conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.255, deja constancia que está en conocimiento de la obligatoriedad de cotización para trabajadores independientes, las que deberá pagar de forma voluntaria a través de los organismos correspondientes o serán descontadas de su declaración de impuestos por el SII y TGR.”

Refiere que resulta del todo indiscutible, que el vínculo jurídico que unió a las partes, no es aquél de naturaleza laboral, sino que uno de índole administrativo-civil, que escapa de la órbita del derecho laboral, y no resulta aplicable dicha normativa a raíz de una errónea interpretación efectuada por tribunal a quo.

Añade que la demandante fue contratada a honorarios en calidad de experta, como consta en la cláusula primera del contrato a honorarios aprobado por la Resolución TRA N° 944/157/2021, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cumpliéndose así, con los requerimientos dispuestos en el artículo 11 del Estatuto Administrativo.

Afirma que si la sentencia recurrida hubiese interpretado adecuadamente las normas referidas, en relación con la acción declarativa que nace por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° del mismo cuerpo legal, debió necesariamente haber determinado el absoluto rechazo de todas las acciones deducidas y al hacer lo contrario, esto es, si hubiese interpretado adecuadamente los artículos 7 del Código del Trabajo y 11 de la Ley N° 18.834, en relación a la acción declarativa que nace por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° del Código del Trabajo, debió necesariamente haber determinado el absoluto rechazo de todas las acciones deducidas, por cuanto en el caso de marras, no se dan ninguno de los



presupuestos legales para sostener que estamos en presencia de una relación laboral, máxime si fue la propia demandante quien libre y voluntariamente, declaró en el contrato de prestación de servicios a honorarios, que consentía en obligarse civilmente con su representa, cotizó previsionalmente conforme lo establece la Ley N° 20.255, y como señala el numeral 26 del considerando décimo, *la actora durante todos los años que prestó servicios para la demandada recibió su respectiva devolución de impuestos.*”, por lo que solicita se anule la sentencia recurrida y, en su lugar, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo con arreglo a la ley, en que se resuelva que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por cuanto nos encontramos ante una relación contractual de naturaleza civil-administrativa, consistente en un convenio de honorarios celebrado con los supuestos fácticos del artículo 11 del Estatuto Administrativo; con costas.

TERCERO: Que, en relación a la primera causal impetrada, del mérito del fallo impugnado, aparece, tal como lo señalaba la denunciante, que el fallo recurrido, de cinco de julio del año en curso, padece de serios vicios, toda vez que, la prueba aportada a la audiencia, no ha sido apreciada conforme a las reglas del recto entendimiento humano, esto es, ha infringido las reglas de la lógica.

En efecto, aparece en el acápite segundo del motivo décimo, que el sentenciador tuvo por acompañado un documento consistente en un certificado, de fecha 18 de junio de 2018, de la Intendenta de aquella época, quien refería que en relación a la actora, que dicha autoridad ponderó la calidad de experta, para que cumpliera funciones en el servicio demandado, conforme a lo señalado en su contrato de honorarios a suma alzada.

Asimismo, en el apartado tercero de dicho motivo décimo, se consignó que la actora, cumpliría las funciones que allí se indican, en calidad de experta y que por los honorarios prestados, percibiría honorarios.

Certificados análogos y de la misma naturaleza, donde solo variaban las autoridades regionales que suscribían dichos contratos con la actora, se aprecian en los numerales cuarto al decimotercero, del mismo motivo décimo.

Dichos hechos de que daban cuenta la documentación en comento, no se trataba de una mera enumeración que efectuaba el sentenciador, toda vez que, tal como se refiere en el epígrafe del motivo décimo, se colige que los referidos hechos, se tuvieron por ciertos.

Por añadidura, en el numeral vigesimosexto del tantas veces nombrado motivo décimo, consignó el sentenciador que la actora, durante el tiempo que prestó servicios para la demandada, recibió su respectiva devolución de



impuestos, hecho que también, al igual que los anteriores, se tuvo por cierto, según claramente lo refiere el encabezado del motivo décimo ya citado.

CUARTO: Que por lo demás, en el motivo decimosexto, el sentenciador refiere y reconoce, que la actora fue contratada en el marco de implementación de la Ley 21.074, denominada “Ley de Fortalecimiento Regional”, en su calidad de experta.

QUINTO: Que, por añadidura, el sentenciador, en el motivo vigesimosegundo, refirió expresamente, al referirse al tópico de las cotizaciones previsionales también demandadas, que éstas no procedían, toda vez que la Ley 20.255, de 2008, establece que la actora, estaba obligada “ella”, a hacer el pago de cotizaciones, por tratarse de una “trabajadora a honorarios”, ya que emitía “boletas”, esto es, debía pagar sus cotizaciones previsionales en forma “independiente”.

Por otro lado, en el mismo considerando, en su párrafo final, de manera dicotómica, da valor al contrato civil celebrado entre las partes, refiriendo que, por tratarse de un contrato de honorarios, ergo, tratarse de un “trabajador independiente”, debía pagar sus cotizaciones de manera voluntaria o ser descontadas por el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la Republica.

SEXTO: Que, no obstante, los hechos que dio por asentados en el considerando décimo y, lo que había concluido en el motivo decimosexto y ratificó en el motivo vigesimosegundo, de manera inconexa, afirma que se estaría en la especie, en presencia de una relación laboral, fundado en unas “Constancias” que habrían redactado dona Arline Evelyn Piñones Cerda y dona Paulina Gajardo Hernández, para concluir que la condición de contrato a honorarios, en la realidad, no resultaba ser efectiva “de acuerdo a la lógica y las máximas de la experiencia”, las cuales, en todo caso, no analiza.

SEPTIMO: Que, como puede apreciarse, en el presente caso se infringe lo que mandata el artículo 456 del Código del Trabajo, al momento de apreciar la prueba, toda vez que el Tribunal no expresó las razones jurídicas o simplemente lógicas, al momento de asignarles valor o desestimar la prueba y el examen de esta última, no lleva a la conclusión que nos ofrece el fallador.

En efecto, fundar la decisión en dos documentos recreados para ser presentado a la audiencia, habiendo declarado una de las personas que lo forjó, aparece dicotómico con todo lo que también concluyó y a que se hizo referencia en los motivos tercero, cuarto o quinto del presente fallo, esto es, lo que se estampo en los acápites 2, 4, 9 y 10 del motivo décimo, hechos los cuales tuvo por ciertos, ergo, tuvo por cierto que la actora fue contratada como “experta” y luego,



concluir que la parte demandada no acreditó que lo fuera, como contradictoriamente lo dijo en el motivo decimosexto.

Esto es, una cosa no puede darse como un hecho asentado o por acreditado –que era experta– y luego concluir que no era experta, esto es, una cosa, no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que aquello no es lógico y transgrede el principio de la no contradicción.

Infracción a la lógica que también se advierte en el considerando vigesimosegundo, cuando en varias de sus partes, sencillamente reconoce que se está ante un contrato de honorarios y en definitiva llega a una conclusión distinta. Como se ha señalado, una cosa es algo, pero al mismo tiempo no lo puede ser, por lo que evidentemente se transgreden principios lógicos en el fallo, al momento de su elaboración.

A lo anterior debe añadirse que el juez también dio por asentado entre los hechos no discutidos del considerando décimo, que la actora emitía boleta de honorarios, declaraba impuestos y obtenía devolución de los mismos, lo cual ratifica flagrantemente en el motivo vigesimosegundo, donde señala que se esta en presencia de un contrato de honorarios, no obstante, al mismo tiempo, dice que aquello no es así, sin explicar mayormente dicha contradicción y sin hacerse cargo, ni siquiera meridianamente, de la temática de los impuestos que el mismo da por acreditado, lo que transforma en ilógica su decisión, toda vez que la temática que dio por acreditada, resulta inimaginable en el contexto de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo, sin embargo, el juez, deja sin explicación aquella decisión bicéfala, tal como se ha explicitado en el presente fallo, errores procesales los cuales vician la decisión y hacen concluir que concurre la causal de nulidad que se invoca.

OCTAVO: Que, así las cosas, sólo cabe hacer lugar a la nulidad planteada - letra -b) del artículo 478 del Código del Trabajo– por infracción manifiesta de las normas de la sana crítica.

NOVENO: Que, asimismo, habida consideración a lo referido en los motivos anteriores, por haberse acogido la causal de nulidad primigenia esgrimida por la demandada, se omitirá un pronunciamiento en torno a la causal de nulidad planteada en forma subsidiaria por dicha parte, por resultar incompatibles con la resuelta en el presente fallo.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 478 letra b), 479 y 482 del Código del Trabajo, **SE ACOGE** el recurso de nulidad interpuesto por don **ANDRÉS PALMA TAPIA**, abogado, en representación de la parte demandada, Gobierno Regional de Arica y Parinacota, en autos laborales caratulados “**JIMÉNEZ** con **GOBIERNO REGIONAL DE**



ARICA Y PARINACOTA”, RIT O-228-2021, RUC 21-4-0371784-0, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado del Trabajo de esta ciudad, en la causa a referida, con fecha cinco de julio del año en curso, por la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y se declara que dicho fallo es nulo.

Díctese acto continuo y sin nueva audiencia, la sentencia de reemplazo que corresponda.

Regístrese y comuníquese vía interconexión.

Redacción del ministro señor Pablo Zavala Fernández.

Rol N° 84-2022 Laboral Cobranza

Pablo Sergio Zavala Fernandez
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:28:17

Marco Antonio Flores Leyton
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:29:53

Claudia Florencia Arenas Gonzalez
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:27:10



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por los Ministros (as) Pablo Sergio Zavala F., Marco Antonio Flores L., Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

En Arica, a catorce de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Arica, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 474 y 482 del Código del Trabajo, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTO:

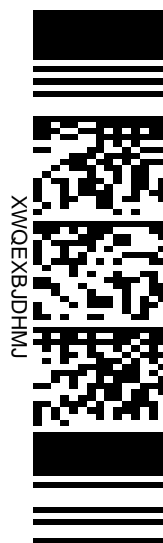
Se reproduce la sentencia de fecha cinco de julio del año en curso, con excepción de los acápites decimoséptimo, decimoctavo del motivo décimo; en el motivo decimosexto el párrafo que comienza con la palabras: "...antecedentes que permiten concluir a este sentenciador..." y que finaliza con: "...con un enfoque a los adultos mayores y mujeres."; del decimotercero al vigesimoprimer, todo lo cual se suprime y de las citas legales de los artículos 7, 8, 9, 73, 159, 162, 168, 172, 173 y 446 del Código del Trabajo, que se eliminan.

Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, a juicio de esta Corte, del mérito de los antecedentes aportados al juicio laboral, se concluye que la relación contractual que unió a la demandante con la demandada, no se encontraba bajo la férula del Código del Trabajo, habida consideración a que, al respecto, en virtud de la norma contenida en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, los sucesivos contratos a honorarios celebrados por las partes, no le confirió el carácter de relación laboral a la habida entre las partes del juicio, toda vez que "las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato", debiendo tenerse presente, el artículo 1° del Código del Trabajo, que excluye de su estatuto regulativo a los funcionarios de la Administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial; a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial; por lo que sus relaciones, se sujetan a dicha disposición del Estatuto Administrativo, en virtud de lo ordenado por el artículo 1° de este mismo cuerpo por el legislador, no siendo dable a otro Poder del Estado, entrar a cuestionar el mérito de lo pronunciado por otro Poder del Estado.

SEGUNDO: Que, de esta forma, según consta de la prueba acompañada por la propia actora, ésta fue contratada por la demandada, mediante contrato fijo de honorarios y de ahí las emanaciones de contrato civil que denota el sentenciador, en los considerandos décimo y vigesimosegundo, en materia de impuestos y cotizaciones previsionales, regidas por normas ajenas a las de una relación contractual laboral.

TERCERO: Que, la norma en comento, faculta a la autoridad, para contratar personal a honorarios, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales, para realizar cometidos específicos, quedando



asentado en el presente caso, que aquello tuvo su origen en una ley especial, del año 2018, debiendo, las personas contratadas a honorarios, regirse por las reglas que establece el respectivo contrato.

Así, fue al amparo de dicho precepto legal, que la demandante fue contratada y su relación con la demandada, quedó regida por las estipulaciones de su contrato a honorarios, es decir, por el Estatuto Administrativo, en su artículo 11 y no por el Código del Trabajo.

CUARTO: Que, consecuencialmente, no se dan los supuestos que exige el artículo séptimo del Código del Trabajo, para estimar que nos encontramos en presencia de una relación regida por el Código del Trabajo y las modalidades del cumplimiento del contrato que señala la actora, se circunscriben dentro de lo que dispone el inciso final del mismo artículo, que permite regular contractualmente, las reglas que establezca el respectivo contrato, siendo sustraída la situación en comento, del imperio del Código del Trabajo, por expresa decisión del legislador, lo que por lo demás, era plenamente conocido, aceptado y aprovechado por la actora –véase la temática de la devolución de impuestos– por lo que, al no encontrarnos en la especie, frente a una relación de carácter laboral, sólo corresponde rechazar las pretensiones de la actora, las cuales tenían como supuesto, la existencia de una relación de naturaleza laboral, lo cual, como ha sido latamente referido, no ha acaecido en la especie.

Por las anteriores consideraciones, normas legales citadas, y lo dispuesto en los artículos 11 del Estatuto Administrativo; y, 1° del Código del Trabajo, **SE DECLARA:**

I.- Que **no se hace lugar** en todas sus partes a la demanda laboral deducida en el presente juicio, por dona Hortensia Lorena Jiménez Watt, en contra del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

II.- Que no se condena en costas a la demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

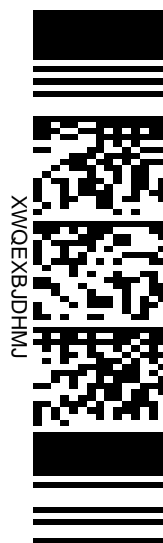
Rol N° 84-2022 Laboral Cobranza

RIT O-228-202121

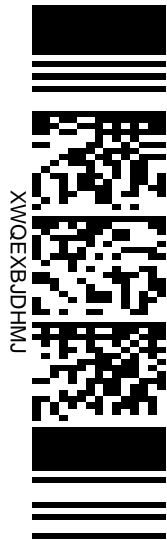
RUC 21-4-0371784-0

Pablo Sergio Zavala Fernandez
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:15:42

Marco Antonio Flores Leyton
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:18:13



Claudia Florencia Arenas Gonzalez
MINISTRO
Fecha: 14/09/2022 16:27:13



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por los Ministros (as) Pablo Sergio Zavala F., Marco Antonio Flores L., Claudia Florencia Eugenia Arenas G. Arica, catorce de septiembre de dos mil veintidós.

En Arica, a catorce de septiembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

